

Definiciones estratégicas de la política exterior de México en El Salvador (1979-1992)

Raúl Benítez Manaut

Antecedentes históricos

La política exterior de México ha vivido momentos cruciales. Respecto a América Latina se han presentado altibajos relacionados con acontecimientos históricos de los países de la región, que acercaron, aislaron o los mantuvieron indiferentes hacia México. En relación con Centroamérica, en el siglo XIX, la definición de las fronteras fue el elemento determinante de la diplomacia de México, sobre todo después de que las elites independentistas decidieron forjar su destino separadamente del naciente Imperio Mexicano en 1821-1822. En ese momento, el factor que llevó a destinos diferentes, además de las distancias y escasas comunicaciones, fue la ideología en pugna entre los conservadores (representantes de sectores agrarios, herederos del sistema colonial, en los que el clero fue el soporte principal) y los liberales (que planteaban la introducción de la economía de mercado a la agricultura y la creación de un Estado fuerte que impulsara el desarrollo económico). Estas mismas rivalidades llevaron a la Federación de Estados Centroamericanos a una cruenta guerra civil y a la división en cinco países hacia 1838. Con Guatemala, México tuvo diferendos por el territorio

del Soconusco hasta 1841, cuando se incorporó de manera definitiva como parte del estado de Chiapas. No obstante, hasta 1882 se establecieron los límites entre ambos países. Con Gran Bretaña también se definieron las fronteras de lo que hoy es Belice, lo que provocó el resentimiento hacia México de los grupos que ostentaron el poder en ese vecino país durante más de cien años.

A inicios del siglo xx la caída del régimen oligárquico de Porfirio Díaz marcó una gran distancia entre México y el istmo. Las elites de los países centroamericanos trataron de evitar el “contagio revolucionario”. Sólo hasta la llegada de un gobierno progresista en Guatemala, en 1944, se reactivaron las relaciones, pero este gobierno únicamente duró 10 años, pues en 1954 fue derrocado por un golpe de Estado. Los militares que tomaron el control del Estado se declararon a sí mismos enemigos de México. Incluso en enero de 1959 estuvo a punto de estallar un conflicto armado y se rompieron las relaciones diplomáticas con Guatemala por espacio de ocho meses.¹ Con el resto de los países centroamericanos las relaciones funcionaron de manera similar: cuando gobernaban civiles había un acercamiento con México y cuando estaban en el poder militares y caudillos, las relaciones se tensaban.

Sin embargo, en la diplomacia entre México y Centroamérica ni la democracia ni la paz fueron conceptos importantes para las fuerzas políticas. En México, derivado de la Revolución de 1910, se consolidó un régimen de gobierno civil unipartidista; sólo en Costa Rica logró construirse un gobierno democrático, después de la llamada “Revolución de 1948”. En el resto de los países, pequeñas elites —principalmente intelectuales—,

¹ Adolfo Aguilar Zinser, “México y la crisis guatemalteca”, en Olga Pellicer y Richard Fagen (eds.), *Centroamérica. Futuro y opciones*, México, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1983, pp. 145-146.

comprometidas o influidas por partidos políticos o agrupaciones internacionales como la Internacional Socialista o la Internacional Demócrata Cristiana, hicieron suyo el discurso de la democracia liberal, que no tuvo eco ni en las oligarquías y sus representaciones políticas, ni en los sectores dominantes de las fuerzas armadas. Poco a poco se gestaron las condiciones para que estallara la gran crisis de Centroamérica de finales de los años setenta.

Influidos por las ideologías prevalecientes durante la Guerra Fría, aparecieron sectores que plantearon la lucha armada para derrocar a las elites oligárquico-militares, tanto en Centroamérica como en México. En México, esos movimientos no lograron crecer ni influir en la población, pero en Centroamérica, por las condiciones políticas (gobiernos militares altamente represivos) y sociales, ganaron influencia e incluso lograron captar un gran respaldo internacional. Las guerras civiles estallaron en Centroamérica cuando los movimientos insurgentes se vincularon con las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y, en general, populares, al dar el salto de reivindicaciones corporativas a planteamientos políticos en un contexto de polarización extrema.²

El estallido de la crisis centroamericana

Al estallar las guerras civiles hacia 1977, primero en Nicaragua, los contendientes desplegaron estrategias militares de guerra total. Las oligarquías y los ejércitos intentaban impedir que triunfaran los movimientos revolucionarios. Los grupos ar-

² Daniel Camacho y Rafael Menjívar (coords.), *Movimientos populares en Centroamérica*, San José, Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1985.

mados de izquierda también desplegaron novedosas estrategias de guerra revolucionaria para derrocar al Estado oligárquico-militar y construir nuevos Estados. Tanto las fuerzas armadas y las oligarquías como los movimientos armados de izquierda buscaron rápidamente crear una red externa de alianzas, lo que las involucró en la dinámica de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, las superpotencias (Estados Unidos y la Unión Soviética) buscaron influir en la región, bajo la premisa de que si los movimientos revolucionarios tenían éxito, se perjudicaba la hegemonía de Estados Unidos y se beneficiaba a la Unión Soviética. La región entró al conflicto geopolítico y en las elites de ambas superpotencias el concepto *suma cero* determinó su política hacia la zona.

En Nicaragua triunfó el movimiento armado revolucionario en julio de 1979, encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En El Salvador, el gobierno y las fuerzas armadas, apoyadas por Estados Unidos, pudieron evitar el triunfo de la izquierda, pero no lograron derrotar militarmente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tras 12 años de guerra civil (1980-1992), por lo que se impulsó una negociación política —más por presión externa que por propio convencimiento—, basada en un *sui generis* esquema de “equilibrio”.³ En Guatemala, por otro lado, las fuerzas armadas no lograron derrotar a la insurgencia, organizada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),⁴ ni ésta pudo crecer en capacidad militar o influencia política, como el FMLN en El Salvador. Sin embargo, aunque tardío en relación con los procesos de pacificación en Nicaragua y El Salvador, el proce-

³ El FMLN de El Salvador es una coalición de cinco grupos armados guerrilleros que se fusionaron en 1980. Se logró firmar la paz en México en enero de 1992. Posterior al proceso de paz, se transformó en partido político.

⁴ La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) integró a cuatro grupos guerrilleros en 1982.

so de paz guatemalteco se logró consolidar a fines de 1996. El eje de estos procesos de paz fue la desmovilización de los grupos guerrilleros y su inserción a la vida política legal.⁵ El proceso de paz de Guatemala incluyó también importantes reformas relativas a buscar soluciones a la cuestión indígena. Los tradicionales grupos gobernantes centroamericanos por fin cedieron ante la demanda de abrir los espacios de participación política de los sectores emergentes, ya fueran grupos que propugnaban la democracia liberal o esquemas de tendencia a la izquierda.

En la crisis centroamericana los actores externos fueron decisivos. Estados Unidos diseñó su política hacia el istmo con discursos y estrategias que buscaban objetivos acordes con la reestructuración de su esquema de confrontación con la Unión Soviética: democratizar la región y contener, neutralizar y, de ser posible, eliminar todas aquellas fuerzas políticas que tuvieran discurso o práctica revolucionaria. En los años ochenta, la democracia estuvo subordinada a la contención del comunismo.⁶ Este modelo de contrainsurgencia que articuló militarización con democratización (o sea, legitimar la contención del comunismo) se llamó *doble vía*.⁷ El conjunto de la estrategia de Estados Unidos fue denominada “guerra de baja intensidad”,⁸ debido a que se logró evitar el uso de fuerzas militares propias para lograr contener el avance comunista. Por su parte,

⁵ En Guatemala se firmó la paz el 29 de diciembre de 1996.

⁶ William M. LeoGrande, *Our Own Backyard. The United States in Central America, 1977-1992*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998.

⁷ Lilia Bermúdez, *Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica*, México, Siglo XXI, 1987.

⁸ El concepto estratégico de *guerra o conflicto de baja intensidad* se generalizó a mediados de los años ochenta en la literatura de Estados Unidos. La redefinición conceptual buscó que no se repitieran los “errores” de Estados Unidos cometidos en la Guerra de Viet Nam y se aplicó tanto para derrocar gobiernos considerados enemigos, como el de Nicaragua (Rollback o Doctrina Reagan), como para reforzar y legitimar gobiernos aliados que emprendían guerras de contrainsurgencia contra guerrillas comunistas, como en El Salvador y Guatemala.

la Unión Soviética respaldó política y militarmente al gobierno revolucionario de Nicaragua, y la democracia en este país se entendió con base en otras coordenadas: la democracia social. La Unión Soviética se proyectó en la región fundamentalmente mediante el gobierno de Cuba.

También durante los ochenta, las oligarquías conservadoras de Guatemala y El Salvador aceptaron las presiones de abrir los sistemas políticos a fuerzas moderadas para permitir el juego político y la competencia. El esquema se basó en que las opciones políticas de centro, principalmente la democracia cristiana, pudieran crecer y convertirse en la alternativa a un Estado oligárquico-militar que necesitaba legitimidad política para poder emprender las guerras de contrainsurgencia. Este modelo de apertura gradual se implementó con gran éxito en Guatemala y El Salvador. Honduras, aunque no vivió una guerra civil, también fue fuertemente influida por la ola democratizadora, por su ubicación geopolítica clave, con fronteras terrestres con los tres países en conflicto. Estados Unidos requería a Honduras tanto para respaldar a los grupos que se encargarían de la desestabilización del gobierno sandinista de Nicaragua, llamados “contras”, como para evitar que el FMLN se consolidara militar y políticamente en El Salvador.

En forma paradójica, la guerra arrinconó a los ejércitos porque no podían emprender dos misiones al mismo tiempo: dirigir la política del Estado y hacer la guerra. Las fuerzas armadas tuvieron que cambiar radicalmente de misión para no desaparecer ante el avance de las insurgencias de izquierda y emprendieron durante la guerra su proceso de profesionalización. Necesitaban que una elite política nueva, antes reprimida y excluida, se ocupara de reconstruir al Estado para que el aparato militar centrara su esfuerzo en la contención de las guerrillas. Se dio la necesidad de que las fuerzas políticas moderadas, democráticas y liberales iniciaran la construcción

de instituciones que buscaran alcanzar el liderazgo de la población en un contexto de gran polarización y que aislaran a las fuerzas de izquierda. Este esquema de contrainsurgencia con democracia prevaleció en El Salvador y Guatemala durante la década de los ochenta.

Las organizaciones revolucionarias comenzaron a considerar la democracia electoral “occidental” como “medio” e “instrumento” viable. Dada la presión del exterior, el FSLN de Nicaragua accedió, en 1984, a llevar a cabo elecciones y las fuerzas de oposición consideradas “somocistas” se abstuvieron de participar, por lo que se dio un extraño proceso electoral para “demostrar” la democracia formal en un proceso revolucionario donde lo fundamental sostenía la consolidación de la democracia social (modelo similar al cubano).

El FMLN salvadoreño confió en su estrategia militar, que por lo demás mantenía a sus fuerzas en un proceso de resistencia y crecimiento lento, y despreció los procesos electorales que se vivieron en la parte “oligárquica” de El Salvador entre 1984 y 1989. Comenzaron los esfuerzos por sustituir el viejo esquema de dominación por un sistema político democrático, en un inicio excluyente. La apertura inició en 1982, impulsada decisivamente por Estados Unidos y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Este proceso de elecciones con contrainsurgencia se convirtió en una necesidad para Estados Unidos, pues la ayuda militar a El Salvador podría bloquearse en el Congreso por el hecho de que sólo se podía apoyar a un gobierno democrático en el que se respetaran los derechos humanos. Por ello, la democracia fue un medio de la contrainsurgencia para *demostrar* que se respaldaba a un gobierno legítimo.⁹ Desde

⁹ El concepto *democracia de demostración* es desarrollado en Edward Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections. U. S. Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam and El Salvador*, Boston, South End Press, 1984.

1980, el FMLN logró establecer una alianza con grupos democráticos y liberales socialdemócratas y socialcristianos denominada Frente Democrático Revolucionario (FDR), que se encargó de las “relaciones exteriores” de los grupos revolucionarios. En 1980, el gobierno mexicano otorgó a esta agrupación el reconocimiento diplomático como “fuerza política representativa”, lo que se verá más adelante.

En el caso de México, si bien el discurso a favor de la democracia estuvo presente durante la época de estabilidad de su sistema político, y éste fue importante en su diplomacia, en realidad México comenzó a ser activo en América Central por motivos de seguridad nacional. La crisis de Guatemala llegaba hasta la frontera mexicana mediante las campañas de contra-insurgencia que afectaban a gran cantidad de comunidades campesinas e indígenas, las cuales causaron una gran crisis humanitaria hacia 1980-1981. A su vez, las elites emergentes centroamericanas que se vinculaban a los movimientos armados comenzaron a buscar respaldo internacional. Los miembros del FSLN nicaragüense se vincularon con dirigentes políticos mexicanos en su esfuerzo por buscar el aislamiento diplomático del dictador Anastasio Somoza. México, junto con Costa Rica, rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua el 20 de mayo de 1979 y un mes más tarde el canciller mexicano se opuso rotundamente a la creación de una “fuerza interamericana de paz” que pudiera intervenir en ese país.

Con esos dos acontecimientos diplomáticos comenzó una era de “contradicciones” en las acciones diplomáticas de México. El rompimiento de relaciones diplomáticas con un país significa un acto de “intervención”, pues se favorece a una de las partes del conflicto (en este caso el FSLN), lo que estaría en contraposición con la Doctrina Estrada; sin embargo, por otro lado, oponerse a la participación de una fuerza militar de intervención se justifica invocando los principios de la política exte-

rior de México, en consonancia con la Doctrina Carranza. Así, comenzó una presencia diplomática mexicana cuyas acciones y discurso oscilaron entre el “realismo” y la seguridad nacional, con la filosofía de la no intervención y la defensa de la soberanía de los pueblos.

De esta manera, los países de América Central se volvieron sujetos de la geopolítica global que emprendían las superpotencias y Europa. En el caso de los países latinoamericanos, Cuba y México fueron los primeros en desplegar sus diplomacias y capacidades nacionales; México, básicamente por medio de su diplomacia, y Cuba, respaldando logística y políticamente a los gobiernos (Nicaragua) y grupos armados de izquierda (El Salvador y Guatemala). Con el tiempo, de manera paulatina los países latinoamericanos se sumarían a la búsqueda de una solución negociada de la crisis centroamericana, casi en el orden en que se ubican geográficamente respecto al istmo: primero Panamá, Venezuela y Colombia (mediante el Grupo de Contadora, desde enero de 1983), y posteriormente Perú, Argentina, Uruguay y Brasil. De manera inédita en la diplomacia del hemisferio, la oposición a la política de Estados Unidos fue notable. Los gobiernos latinoamericanos se sumaron a la causa casi de manera automática, a medida que transitaban de gobiernos militares a civiles, por medio de procesos electorales. Disentir de la política de Estados Unidos hacia el istmo era casi una condición de las nacientes democracias de América del Sur. Esto se instituyó a partir de la constitución del Grupo de Contadora en enero de 1983, integrado por México, Venezuela, Colombia y Panamá, que se ampliaría al Grupo de Apoyo de Contadora (al que se sumaron Brasil, Argentina, Perú y Uruguay), que a su vez evolucionó al Grupo de Río. Finalmente, lo que se buscaba con estos esfuerzos de paz era que en Centroamérica no se fortalecieran las opciones militares ni las revolucionarias ni las

contrarrevolucionarias, mediante la promoción de las fuerzas democráticas que se encontraban arrinconadas entre los extremos.¹⁰

Contadora fue el primer intento que involucró decididamente los conceptos de *paz* y *democracia*. En las distintas acciones diplomáticas entre 1983 y 1986, logró tres compromisos de forma simétrica: impulsar la primera propuesta de paz, la democracia y la desmilitarización, además de afirmar que las fuerzas militares de la región se desligaran de sus respectivos apoyos externos. En síntesis, se planteaba cambiar radicalmente las bases de sustento político y militar del Estado en la región. Sin embargo, la oligarquía y las fuerzas armadas lo consideraron una injerencia externa, producto de proyectos geopolíticos de los países del Grupo. Así, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica se alinearon a la diplomacia de Estados Unidos y vieron con desconfianza el papel de México y Panamá, que otorgaban respaldo diplomático al gobierno de Nicaragua. Hoy se sabe que tampoco fue bien visto este esfuerzo por Cuba y la Unión Soviética, pues lo consideraron un freno para que los acontecimientos se decidieran a favor de las opciones revolucionarias. Por esta razón, el último proyecto de Acta de Paz planteado por el Grupo de Contadora, a mediados de 1986, a los gobiernos de los cinco países no logró ser firmado. Triunfaron la geopolítica y el realismo sobre la diplomacia.¹¹

¹⁰ Un detallado análisis de las elites democráticas centroamericanas puede consultarse en Alain Rouquié (coord.), *Las fuerzas políticas en América Central*, México, FCE, 1991.

¹¹ Esto es analizado en detalle en Ricardo Córdova Macías y Raúl Benítez Manaut (comps.), *La paz en Centroamérica. Expediente de documentos fundamentales 1979-1989*, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1989.

El Salvador en el radar mexicano

Cuando triunfó la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 una vieja idea geopolítica se asimiló como una verdad tanto entre las oligarquías y los militares de América Latina como en el gobierno de Estados Unidos, el cubano y, no podía ser de otra manera, México: la *teoría del dominó*. Se pensaba que se desencadenaría la caída de las dictaduras en el istmo centroamericano por el empuje de la combinación de los movimientos populares sumado a la presencia de grupos revolucionarios con gran capacidad militar. Rápidamente, en Estados Unidos se recompuso la estrategia hacia el istmo. En un primer momento, durante el gobierno de James Carter (1977-1981), se aisló a Anastasio Somoza y, según sus pensadores geopolíticos, ello contribuyó a su caída. Carter culminó su gobierno en enero de 1981 y subió al poder Ronald Reagan, quien restauró una enérgica *diplomacia de contención* del comunismo en el mundo. Cuba, por el contrario, siguiendo también la lógica de la caída de las fichas del juego de dominó, sentía la obligación de ayudar a cambiar el mapa a su favor y comenzó la ayuda al gobierno nicaragüense, pero también a los movimientos armados de El Salvador y Guatemala.

México, sellando su viraje diplomático iniciado en mayo de 1979, pasó de la indiferencia a la acción, y haciendo un paralelo de su historia con la de Centroamérica, determinó que era imposible parar el ascenso de los movimientos populares y revolucionarios (como había sucedido en México entre 1910 y 1920), con lo cual comenzó a otorgarles respaldo diplomático y hasta político y económico a dichos movimientos. El presidente José López Portillo abrió un capítulo de activismo diplomático que sellaría los tres últimos años de su gobierno (1979-1982). Después de Nicaragua seguía El Salvador, entre otras razones por la fuerza acumulada por las guerrillas y el movimiento popular

en el segundo semestre de 1979. Para México era vital que la “solidaridad revolucionaria” no se replicara entre los grupos de izquierda mexicana, pues el país estaba saliendo también de una pequeña “guerra de contrainsurgencia”, con grupos armados que aparecieron desde el movimiento de protesta estudiantil de 1968. Aquí radicaba el ingrediente de seguridad nacional de su diplomacia. El componente filosófico se sostenía en evitar lo “directo” de la estrategia de Estados Unidos que, entre otras cosas, promovía un muy acelerado fortalecimiento de las fuerzas armadas de los países que ayudaban a parar el “virus” comunista, y que daba pie a una inédita carrera armamentista en el istmo.

En otras palabras, la estrategia mexicana se basaba en evitar los extremos: la militarización y la contrainsurgencia promovida por Estados Unidos, y la radicalidad de los grupos revolucionarios. Por ello, México se acercó a las elites moderadas de la región; en El Salvador veía con simpatía al aliado no militar del proceso revolucionario: el FDR. Esta postura se replicaba en la diplomacia de Europa. Francia respaldó una iniciativa mexicana, a la que revitalizó por el carácter inédito de la acción. En voz del diplomático francés más involucrado en impulsar el diálogo en El Salvador, Alain Rouquié:

El gobierno francés, lejos de limitarse a lamentar esta situación que les hace el juego a las superpotencias y favorece el comunismo, interviene activamente y de manera inesperada. El 28 de agosto de 1981, Francia y México firman una declaración sobre el conflicto salvadoreño que reconoce que los frentes de oposición a la junta cívico-militar de San Salvador, apoyada por Estados Unidos, constituyen una “fuerza política representativa” con la cual conviene negociar una solución al conflicto. Esta declaración poco ortodoxa entre una potencia europea y un gran país de la región que ha hecho de la no injerencia un dogma causa sor-

presa por más de un motivo. Fruto de una iniciativa mexicana, esta resolución no convencional es testimonio de un acercamiento inédito entre un México embriagado por su petróleo, ávido de responsabilidades internacionales, y la Francia posterior al “10 de Mayo” en busca de vías y medios para cambiar y moralizar la política internacional.¹²

Esta declaración lógicamente fue vista con gran indignación por el gobierno y los militares salvadoreños —quienes acusaron a México de “intervención” y, por ende, de traicionar sus propias doctrinas de política exterior—,¹³ y sorprendió tanto a Estados Unidos como al resto de los gobiernos centroamericanos.

Sin lugar a dudas el gobierno más preocupado fue el guatemalteco, pues suponía que si México respaldaba la coalición FMLN-FDR, casi por inercia podría simpatizar con las organizaciones revolucionarias de ese país. Al ubicarse en contra de la estrategia desplegada por Estados Unidos, que en agosto de 1981 ya se había comprometido a fondo con la transformación total de la fuerza armada de El Salvador para que tuviera la capacidad de enfrentar militarmente al FMLN, el comunicado provocó una reacción diplomática de rechazo en toda la región. El ex presidente de Guatemala Carlos Arana Osorio declaró que México siempre había sido un país imperialista y que “no abandona la intención de invadir Guatemala”.¹⁴ El gobierno de Estados Unidos promovió, junto al venezolano, una postura de rechazo al comunicado franco-mexicano que firmaron nueve países, entre ellos siete gobiernos militares de América del Sur,

¹² A. Rouquié, *Guerras y paz en América Central*, México, FCE, 1992, pp. 269-270.

¹³ “Discurso del presidente de la junta de gobierno de El Salvador, José Napoleón Duarte, de rechazo al comunicado franco-mexicano, 29 de agosto de 1981”, en *Estudios Centroamericanos* (El Salvador), núm. 395, septiembre de 1981.

¹⁴ *Prensa Libre* (Guatemala), 4 de septiembre de 1981.

al que se sumaron los de Venezuela y Colombia. Esta postura se replicó los meses subsiguientes en la prensa de Honduras e incluso en la de Costa Rica. El clímax de esta diplomacia activa mexicana se dio el 15 de febrero de 1982. En un discurso en la Plaza de la Revolución de Managua, el presidente José López Portillo señaló que se debía proceder a firmar, entre Nicaragua y Estados Unidos, un pacto de no agresión en la zona; recalcó que el conflicto centroamericano debía separarse de la lucha Este-Oeste y advirtió a Estados Unidos sobre los peligros de una intervención directa. Respecto a El Salvador, propuso una solución negociada entre las partes y se opuso a que las elecciones y la democracia se realizaran sin negociaciones.¹⁵

Uno de los resultados evidentes del comunicado del 28 de agosto de 1981 fue que la coalición FDR-FMLN lograra tener voz en el escenario internacional. En México se abrieron oficinas de prensa y representación de las guerrillas y en el país se construyó una base de respaldo y solidaridad en amplios sectores universitarios, sindicales y políticos, así como en los medios de comunicación. Esto se sumaba a las simpatías que en los primeros años tenía el proceso revolucionario nicaragüense entre los sectores progresistas mexicanos. Con lo anterior se replicaban fenómenos como el respaldo popular a la Revolución cubana en los años sesenta —que, según la tendencia política del gobierno mexicano, se ampliaba o reducía—; la reacción del gobierno del presidente Luis Echeverría frente al golpe de Estado en Chile en 1973, y la condena a la injerencia de Estados Unidos que ayudaba a impulsar golpes de Estado en el subcontinente.

Con la diplomacia hacia Centroamérica, se abrió otro capítulo de lo que se denominó “el empleo de la política exterior para satisfacer a la izquierda mexicana”, que en el seno del sistema político tenía cerrados los espacios de participación. Para

¹⁵ A. Rouquié, *Guerras y paz...*, p. 274.

septiembre de 1982, a fines del gobierno del presidente López Portillo, estalló una grave crisis económica que limitó el margen de maniobra diplomático. Se inauguraba la llamada “crisis de la deuda externa” y se abría un periodo de gran recesión en la economía mexicana. En Centroamérica no se podía emplear el respaldo petrolero con la libertad que lo hizo López Portillo en Nicaragua y se debían abrir negociaciones con Estados Unidos. Por ello, el año de 1982 fue de transición en la diplomacia mexicana hacia el istmo: por un lado se habían abierto los canales de comunicación con el gobierno sandinista y el FDR-FMLN de El Salvador, pero por el otro el costo de esta disidencia con Estados Unidos fue elevado, sobre todo por la vulnerabilidad financiera de México.

El cambio de gobierno en México en diciembre de 1982 sirvió para ajustar la diplomacia subregional. En El Salvador la realidad política evolucionaba. El FMLN se consolidaba militarmente, pero no podía avanzar ni tener presencia en la capital del país ni en las ciudades más importantes. El ejército comenzaba a recuperar posiciones, lo que era producto de la asistencia de Estados Unidos, y se perfilaba la construcción de un sistema político democrático restringido a la participación de las fuerzas de derecha y centro, como un requerimiento de Estados Unidos para seguir proporcionando ayuda militar a El Salvador, sin oposición del Congreso. El FMLN, al no tomar el poder rápidamente —como sucedió en Nicaragua—, obligaba a los países que lo habían respaldado a moderar sus posiciones y a romper el aislamiento que se daba a su diplomacia por parte de Estados Unidos. El presidente Miguel de la Madrid, en condiciones mucho más difíciles por el estallido de la crisis económica mexicana —lo que restaba a México capacidad de maniobra—, buscó abrir opciones de concertación, para lo cual se acercó a los gobiernos de Venezuela, Colombia y Panamá, mismos que decidieron emprender el esfuerzo del diálogo entre

los gobiernos del istmo y fundar el Grupo de Contadora en enero de 1983. Así, la diplomacia de México hacia El Salvador se ubicó en el ámbito regional.

Contadora trabajó durante tres años empeñándose en que los cinco países aceptaran firmar un acta de paz. De ésta hubo distintos borradores hasta que su última versión se presentó en junio de 1986. Los diferentes protagonistas de la diplomacia mexicana señalaron que no firmar el acta se debió a un proceso en el que los gobiernos aceptaban todo el contenido del texto y, al final de las jornadas, aparecían “fantasmas”, por los que a la mañana siguiente se revocaban los compromisos pactados el día anterior. Las objeciones provenían, “aparentemente”, de la presión que el gobierno de Estados Unidos ejercía sobre los de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, y también, en voz de muchos diplomáticos, por la “oposición silenciosa” del gobierno cubano, que en ese momento ejercía gran influencia en el de Nicaragua.

Estados Unidos y Cuba eran los dos actores externos a la región con presencia militar. Estados Unidos tenía grupos de asesores militares en El Salvador, conduciendo la estrategia contra el FMLN, y en Honduras, respaldando a los grupos contrarrevolucionarios de Nicaragua que tenían sus bases de operaciones en territorio hondureño. Cuba tenía un grupo militar que respaldaba al ejército de Nicaragua en su guerra para enfrentar a los grupos contrarrevolucionarios y, a decir de muchos estrategas, dicho grupo era el que realmente dirigía la estrategia militar, debido a la experiencia que había adquirido en el combate a grupos armados similares en Angola. El acta de paz incluía, como uno de los principales compromisos, la salida de la región de todos los asesores militares externos.¹⁶

¹⁶ Se puede consultar la versión final del acta en R. Córdova Macías y R. Benítez Manaut (comps.), *op. cit.*, pp. 281-289.

Así, México regionalizó su política hacia El Salvador mediante Contadora y la no firma del documento final en 1986 llevó a un repliegue de sus esfuerzos diplomáticos. ¿Fue un fracaso esta gran empresa diplomática? La respuesta es negativa, debido a que sentó un precedente de una política alternativa a las fórmulas militaristas. Centroamérica buscó, aunque con resultado también negativo, un esfuerzo propio denominado *Proceso de Esquipulas*, mientras que los conflictos militares determinaron el rumbo de los acontecimientos hasta 1989-1990.¹⁷

Guerra y democracia en El Salvador

En El Salvador, en el primer quinquenio de los ochenta se generalizaron los combates. Durante el segundo quinquenio los enfrentamientos militares alcanzaron su fase más destructiva y se desplegaron las estrategias de guerra de baja intensidad (en la nomenclatura de Estados Unidos, que sostenía decididamente la estrategia de contención del comunismo),¹⁸ por ello, tanto las fuerzas armadas como el FMLN desecharon cualquier posibilidad de entendimiento político.

De manera previa a la mediación de la ONU que inició en 1990, se trató de terminar la guerra, aunque sin éxito, en distintos momentos. Cuando por vez primera se presentó un proceso electoral aceptable en 1984, con la participación de las fuerzas políticas de centro-derecha encabezadas por el PDC y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el presidente

¹⁷ Gabriel Aguilera Peralta, *Guatemala entre la paz posible o la paz deseable*, Guatemala, PPD-Retos, 2005.

¹⁸ Cynthia Arnson, *Crossroads. Congress, the Reagan Administration, and Central America*, Nueva York, Pantheon Books, 1989; Anjali Sundaram y George Gelber (eds.), *A Decade of War. El Salvador Confronts the Future*, Nueva York, Monthly Review Press, 1991.

triunfante, José Napoleón Duarte, hizo un llamado al diálogo con el FMLN, del cual se desprendieron dos reuniones sin repercusiones positivas. En La Palma (15 de octubre de 1984) y Ayagualo (30 de noviembre de 1984), el presidente se reunió con mandos militares del FMLN; sin embargo, el gobierno ofreció simplemente la inserción del FMLN al proceso político electoral, sin discusión de otros aspectos sustantivos, mientras que el FMLN hablaba de “compartir el poder”, planteamiento considerado descabellado por el gobierno y las fuerzas armadas. Esto impidió la evolución de la negociación, además de que las partes confiaban en sus estrategias militares más que en salidas políticas. Hasta 1987 se celebró una tercera ronda de diálogo en San Salvador, en la sede de la Nunciatura Apostólica, por el impulso abierto por los acuerdos de Esquipulas II, los días 4 y 5 de octubre de 1987.¹⁹

Entre 1984 y 1989, el gobierno salvadoreño trató de revestirse, con éxito, de legitimidad. La realización de procesos electorales se abrió paulatinamente a la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción del FMLN. Incluso el FDR, la coalición política de izquierda que en 1980 se alió con el FMLN, en la elección presidencial de 1989 participó con una nueva coalición política, la Convergencia Democrática, y postuló a un importante líder histórico de la izquierda salvadoreña, el doctor Guillermo Manuel Ungo. Poco a poco la democracia electoral se abrió espacios y se legitimó, a pesar de la generalización de los combates en parte importante del territorio.²⁰

Alfredo Cristiani, candidato de ARENA, ganó la elección en marzo de 1989. En junio tomó posesión y envió un mensaje de

¹⁹ R. Córdova, “El proceso de diálogo-negociación y las perspectivas de paz”, en *El Salvador: guerra, política y paz (1979-1988)*, San Salvador, CINAS-CRIES, 1988.

²⁰ Joseph Tulchin y Gary Bland (eds.), *Is There a Transition to Democracy in El Salvador*, Boulder, Lynne Rienner, 1992.

diálogo al FMLN. Entre julio y septiembre de ese año se llevaron a cabo varias conversaciones entre el nuevo gobierno y la insurgencia; no obstante, el gobierno planteó la entrega de las armas sin negociación, mientras que la represión contra importantes dirigentes del movimiento sindical se incrementó notablemente. El FMLN sostuvo que para negociar en condiciones favorables, en las que se tuvieran en cuenta sus planteamientos, debía demostrar su fuerza militar, por lo que preparó la ocupación de la capital la noche del 11 de noviembre. Con su avance militar, la guerrilla mostró una capacidad de fuego inaudita, lo que cambió la percepción sobre la manera de solucionar el conflicto. Estados Unidos aceptó que la solución militar no era viable y que se debería negociar. El jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, general Maxwell Thurman, responsable del U. S. Military Group de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, declaró que era “imposible derrotar a corto plazo al FMLN”, con lo que dio a entender que la salida era la negociación.²¹

Entre diciembre de 1989 y marzo de 1990 hubo una intensa actividad diplomática para buscar un mecanismo de mediación. Los presidentes de los países centroamericanos, reunidos en San Isidro Coronado, Costa Rica, el 12 de diciembre de 1989, fueron los primeros en plantear que la ONU podría mediar.²² Por su parte, los países que habían participado en el Grupo de Contadora, en especial México y Venezuela, iniciaron sus propias gestiones, y Estados Unidos respaldó al gobierno de El Salvador para que se dirigiera a la ONU.²³ Por su lado, la

²¹ “U. S. General Says Salvador Cannot Defeat the Guerrillas”, *The New York Times*, 9 de febrero de 1990.

²² “Declaración de San Isidro Coronado, 12 de diciembre de 1989”, en *Las Naciones Unidas y El Salvador 1990-1995*, Nueva York, Naciones Unidas, 1995, pp. 105-107.

²³ “Carta de fecha 29 de enero de 1990 dirigida al secretario general por el presidente de El Salvador, Sr. Alfredo Cristiani”, en *ibid.*, pp. 110-112.

dirigencia del FMLN también consideró viable la mediación del organismo internacional. El 4 de abril de 1990 se reunieron oficialmente en Ginebra, por vez primera bajo la mediación de la ONU, los representantes del gobierno con el FMLN y así arrancó el proceso mediador.²⁴ La importancia de esta reunión radica en que las transformaciones estructurales que planteó el FMLN fueron reconocidas como temas de discusión y eso cambió por completo los contenidos de la negociación. Desde 1984 hasta 1989, el gobierno simplemente solicitaba al FMLN la entrega de armas a cambio de amnistía y participación electoral, y a partir de abril de 1990, se reconoce la necesidad de efectuar una profunda reforma del Estado y discutir los problemas socioeconómicos del país.²⁵

Según el Acuerdo de Ginebra, el proceso de paz debía tener cuatro objetivos: terminar el conflicto armado por la vía política, completar la democratización del país, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.²⁶ Un mes después, las partes definieron los contenidos completos en que debía basarse la negociación, al incluir una agenda completa que comprendía la discusión de la fuerza armada, los derechos humanos, el sistema judicial, el sistema electoral, la reforma constitucional y el problema económico social.²⁷

En síntesis, cuatro son los elementos que hicieron posible el proceso de negociación de El Salvador: a) la percepción de

²⁴ Véase R. Benítez Manaut, "La ONU y el proceso de paz en El Salvador", en *Revista Mexicana de Política Exterior*, núm. 34, primavera de 1992, pp. 35-52.

²⁵ Fernando Harto de Vera, *El Salvador 1979-1991: la larga marcha hacia la paz*, San Salvador, Fundación Ungo (Documentos de trabajo. Serie Análisis de la Realidad Nacional, vol. 94, núm. 3), 1994.

²⁶ "Acuerdo de Ginebra, 4 de abril de 1990", en *Las Naciones Unidas y El Salvador...*, p. 122.

²⁷ "Agenda general y calendario del proceso completo de negociación", Caracas, 21 de mayo de 1990, en *ibid.*, p. 123.

las fuerzas armadas de El Salvador y Estados Unidos sobre la capacidad militar del FMLN, por lo que la guerra se encontraba militarmente empatada y sin salida; b) la presión interna del conjunto de la sociedad civil; c) la presión internacional, debido a las consecuencias que se observaban en el entorno geopolítico inmediato y el fin de la Guerra Fría, y d) la necesidad de un mediador con poder y capacidad suficiente para sentar a las partes y ejercer una presión decisiva. La mediación interna estaba completamente agotada (el asesinato de los sacerdotes jesuitas por el ejército el 16 de noviembre de 1989 había cerrado por completo la posibilidad de mediación de la Iglesia) y el gobierno y el FMLN aceptaron y solicitaron la participación de la ONU. En este sentido, el fin de la Guerra Fría benefició a El Salvador, debido a que las superpotencias aceptaron las nuevas condiciones.²⁸

Entre el 4 de abril de 1990 y el 16 de enero de 1992 se efectuaron 22 rondas de negociaciones. De ellas, 12 fueron en México, dos en Venezuela, cuatro en Costa Rica y el resto en las sedes de la ONU en Ginebra y Nueva York. Un elemento importante es que en la negociación se involucró al conjunto de la elite política de El Salvador, debido a las reformas constitucionales que debían hacerse para cumplir los compromisos. En ese sentido destaca la reunión sobre reformas constitucionales celebrada en México, en abril de 1991. El final de la negociación,

²⁸ De manera informal las dos superpotencias habían acordado apoyar la mediación de la ONU desde inicios de 1990, a través de la autorización para los esfuerzos de paz en el Consejo de Seguridad de la ONU. El 1 de agosto de 1991, bastante avanzada la mediación, el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética emitieron un comunicado conjunto en el que ratificaban la voluntad de negociación, que se interpretó como un respaldo al secretario general de la ONU. Véase “Declaración conjunta de fecha 1 de agosto de 1991 sobre la cooperación entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Centroamérica”, en *ibid.*, pp. 150-151.

que se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 1991, fue muy importante, pues en ese momento los intereses de la elite económica y política de El Salvador se pusieron en juego, debido a que se discutió el aspecto agrario y el tema de las fuerzas armadas.

El Acta de Paz firmada el 16 de enero de 1992 en Chapultepec²⁹ incluyó la modalidad de reinserción del FMLN a la vida política y la amnistía para sus integrantes; una profunda reforma de las fuerzas armadas, que abarcaba depuración; reducción de efectivos; reforma de la doctrina militar; superación de la impunidad; subordinación al poder civil; reforma del sistema de educación militar; desmilitarización de los cuerpos de seguridad pública, en la que destacaba la creación de la Policía Nacional Civil, y, en síntesis, una modificación radical de las relaciones cívico-militares.³⁰ Se incluyó también el tema socioeconómico, fundamentalmente la profundización de la reforma agraria, incorporando tierras para ex combatientes, reformas al sistema judicial y al sistema electoral.

Distintas han sido las interpretaciones del Acuerdo de Paz de 1992. Desde aquellas que señalan que es un contrato social fundacional,³¹ en el que las partes sacrifican sus ideologías originales para hacer posible la negociación, hasta las que sostienen que es una “transición negociada”³² o una “revolución

²⁹ “Acuerdo de Paz, México, 16 de enero de 1992”, en *ibid.*, pp. 205-243.

³⁰ Véanse los libros *Doctrina militar y relaciones ejército-sociedad*, San Salvador, Fuerza Armada de El Salvador-ONUSAL, 1994, y *Relaciones cívico-militares en el nuevo marco internacional*, San Salvador, Fuerza Armada de El Salvador-ONUSAL, 1994.

³¹ Manuel Montobbio, *La metamorfosis de Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador*, Barcelona, ICARIA, 1999.

³² Richard Stahler-Sholk, “El Salvador’s Negotiated Transition: From Low-Intensity Conflict Low-Intensity Democracy”, en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 36, núm. 4, invierno de 1994.

negociada”.³³ En estas interpretaciones del proceso de paz se observan desde análisis optimistas que destacan la superación de las condiciones de los ochenta, el éxito en la implementación de los Acuerdos de Paz, la plena participación política del FMLN y una reforma del Estado profunda que incluye la construcción de nuevas instituciones claves, como la Policía Nacional Civil (PNC),³⁴ hasta la plena vigencia del derecho humanitario.³⁵ Para la propia ONU, el hecho de terminar la misión ONUSAL el 30 de abril de 1995 y transformarla en una Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL), representó un gran éxito en el cumplimiento del mandato otorgado en 1992. La ONU consideró exitosa la transición de una sociedad y un sistema político militarizado a uno “civilizado” y desmilitarizado, vía reformas políticas e institucionales, y señaló como pendientes los aspectos propios de desarrollo económico y social de un país con los niveles de atraso de El Salvador, para lo cual ya no creía necesaria una misión de paz; por ello, traspasó sus atribuciones al PNUD.³⁶ Uno de los elementos más exitosos de las profundas reformas institucionales fue la relativa a las estructuras militares.³⁷

³³ Terry Lynn Karl, “El Salvador’s Negotiated Revolution”, en *Foreign Affairs*, vol. 71, núm. 2, primavera de 1992, y Jack Spence y George Vickers, *A Negotiated Revolution? A Two Year Progress Report on the Salvadoran Peace Accords*, Cambridge, Hemisphere Initiatives, 1994.

³⁴ Gino Costa, “The U. N. and the Reform of the Police in El Salvador”, en *International Peacekeeping*, vol. 2, núm. 3, otoño de 1995. Costa fue uno de los funcionarios de ONUSAL responsables de la creación de la Policía Nacional Civil.

³⁵ Tathiana Flores Acuña, *The United Nations Mission in El Salvador. A Humanitarian Law Perspective*, La Haya, Kluwer Law International, 1995.

³⁶ “Carta de fecha 6 de febrero de 1995 dirigida al presidente del Consejo de Seguridad por el secretario general, relativa a los arreglos para después de la disolución de la ONUSAL”, en B. Boutros-Ghali, *op. cit.*, pp. 636-637.

³⁷ R. Córdova, *El Salvador: reforma militar y relaciones civico-militares*, San Salvador, Fundación Ungo, 1999.

Las interpretaciones “pesimistas” hacen hincapié en el deterioro de las condiciones de vida de la población, el aumento del desempleo y el hecho de que, con la implementación de las políticas económicas neoliberales durante el periodo de gobierno de Alfredo Cristiani, las aspiraciones de mejorar el nivel de vida de la población —uno de los factores que motivó que los grupos se reunieran en el FMLN para emprender la lucha armada— se desvanecieron. Por ello, los Acuerdos de Paz se ubicarían en una profunda reforma del Estado —en la que los cambios en las fuerzas armadas sin duda serían fundamentales—, sin dirigir las acciones a mejorar las condiciones de vida de la población.

Distintas evaluaciones del proceso de paz tienen en cuenta estos resultados contradictorios, en general valoran como completo el proceso de superación de la guerra y la militarización.³⁸ En lo que respecta al cumplimiento del Acta de Paz, los principales problemas se relacionan con el tema del reparto de tierras.

Por otro lado, a pesar de la creación de la PNC, debido al aumento del desempleo y subempleo, y también a causa de la desmovilización de los miembros del ejército y del FMLN, lo que muchos consideran una consecuencia de las políticas neoliberales, la delincuencia ha crecido a niveles nunca vistos. Las estadísticas registran una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, con muertes superiores a las registradas en comba-

³⁸ Véase William Stanley y David Holiday, “Under the Best Circumstances: ONUSAL and Dilemmas of Verification and Institution Building in El Salvador”, documento presentado en el seminario “Peacemaking and Democratization in the Hemisphere Multilateral Approaches”, Miami, 11-13 de abril de 1996; Tommie Sue Montgomery, *Revolution in El Salvador. From Civil Strife to Civil Peace*, Boulder, Westview Press, 1995 (en especial el capítulo 8 y el epílogo); Carlos Vilas, “Un balance de la ejecución de los acuerdos de paz en El Salvador”, en *Papers*, núm. 49, 1996, y Jack Spence, David Dye, Mike Lanchin, Geoff Thale y G. Vickers, *Chapultepec: Five Years Later. El Salvador's Political Reality and Uncertain Future*, Cambridge, Hemisphere Initiatives, 1997.

tes durante la guerra. En los 12 años de guerra se estima que murieron 75 000 salvadoreños (6500 por año), mientras que en 1994 murieron 9135 personas por asalto en las calles; en 1995, 8485, y en 1996, 8047. En otras palabras, se salió de una guerra civil, pero se abrieron condiciones para una gran crisis social, en parte heredada por la intensidad de los combates y la reconfiguración social que se produjo durante la guerra.

Dos hechos demuestran este balance contradictorio del proceso de paz. Por un lado, las elecciones presidenciales de 1994 se llevaron a cabo bajo difíciles condiciones políticas y técnicas, y resultaron muy satisfactorias para los contendientes.³⁹ La consolidación del proceso de transición a la democracia se confirmó con las elecciones municipales y para representantes de la Asamblea, el 16 de marzo de 1997, en las que el FMLN triunfó en lo que se considera el cargo político más importante después del presidente: la alcaldía de San Salvador. El presidente Armando Calderón Sol y las fuerzas armadas reconocieron el triunfo político de la ex guerrilla muy rápidamente, cuando se tuvieron resultados definitivos. Tras esta elección, el FMLN gobernaría a más del cincuenta por ciento de la población salvadoreña a nivel de gobiernos locales y municipales, e incluso tendría una posición decisiva en la Asamblea Legislativa. Estos fenómenos de pluralismo político se han ratificado con las elecciones presidenciales de 1999 (en las que ARENA volvió a ser el partido triunfante) y las municipales y de Asamblea Legislativa de marzo de 2000, en las que el FMLN mejoró sus posiciones.⁴⁰ Posteriormente, en las elecciones presidenciales

³⁹ R. Córdova, *El Salvador en transición: el proceso de paz, las elecciones generales de 1994 y los retos de la gobernabilidad democrática*, San Salvador, Fundación Ungo, San Salvador, julio de 1994.

⁴⁰ La Asamblea Legislativa ha tenido una importante revaloración de su imagen ante la población y eso ha sido uno de los componentes esenciales del proceso de democratización. Véase José Miguel Cruz, *La Asamblea Legislativa*

de 2009, el triunfo del candidato del FMLN, Mauricio Funes, confirmó que la democracia establecida en los acuerdos de 1992 respondió a los fines que se proponían.

Por último, la búsqueda de resolución de las causas estructurales debe incluir reformas a las políticas económicas y transformar la cultura política como apoyo del proceso de democratización,⁴¹ a fin de superar los problemas causados por la guerra y ahora potenciados por las políticas neoliberales.⁴²

Reflexión final

En los anales de la ONU se considera la misión de paz de El Salvador una de las más exitosas de todas en las que ha participado la organización internacional: “Como resultado de uno de los esfuerzos de más amplio alcance que las Naciones Unidas hayan emprendido jamás, en 1995 se podía afirmar con confianza que El Salvador era una nación transformada. [...] Las Naciones Unidas desempeñaron una función catalítica en esa metamorfosis”.⁴³

¿Cuál fue la contribución de México al proceso de paz de El Salvador? En un momento de gran polarización, incluso de la diplomacia (1980-1981), México abrió el surco para el reconocimiento como actores a los grupos emergentes que habían estado sistemáticamente excluidos de la vida política salvadoreña. El comunicado franco-mexicano es expresión de esta

en la perspectiva de la opinión ciudadana (1997-1999), San Salvador, Fundación Ungo-UCA-Fundación Ebert, 1999.

⁴¹ Mitchell Seligson y R. Córdova, *El Salvador: de la guerra a la paz. Una cultura política en transición*, San Salvador, IDELA-Fundación Ungo-Universidad de Pittsburg, 1995.

⁴² Véase James Boyce (ed.), *Economic Policy for Building Peace. The Lessons of El Salvador*, Boulder, Lynne Rienner, 1996.

⁴³ B. Boutros-Ghali, “Sinopsis”, en *Las Naciones Unidas y El Salvador...*, p. 3.

audacia diplomática. Más adelante, en otras circunstancias, el Grupo de Contadora se opuso a la diplomacia realista de las superpotencias en la fase final de la Guerra Fría.

A México (así como a Europa y a los países latinoamericanos integrantes del Grupo de Río) se le cerraron los espacios entre 1986 y 1989, años en los que se produjeron los más cruentos combates en los conflictos y guerras civiles de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Sin embargo, a la par de la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, se abrieron súbitamente las oportunidades, ingresó la ONU como actor decisivo y México se “subió al carro de la paz” como el país huésped de 12 de las 22 reuniones preparatorias del proceso de paz. Las dos reuniones más importantes, la de discusión de reformas constitucionales y la firma del Acta de Paz, se celebraron en México. El país se ganó el reconocimiento de la ONU, del gobierno salvadoreño y de la insurgencia; por ello, la paz se firmó en el Castillo de Chapultepec, en enero de 1992. Otro elemento decisivo para analizar la experiencia diplomática es que México participó con contingentes policiacos en la misión ONUSAL. Esta experiencia no se volvió a repetir como modalidad en la política exterior de México.

Después de la experiencia salvadoreña, México respaldó el proceso de paz de Guatemala, cuya Acta de Paz se firmó en diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de ese país; sin embargo, por circunstancias derivadas de la política interna de México, el país poco a poco se fue replegando de la región centroamericana. Sin embargo, quedó marcado o tatuado en la historia de la diplomacia mexicana este acervo de experiencias de apoyo al proceso de paz salvadoreño.